



Proceso	Verbal Rendición provocada de cuentas
Demandantes	Abogados Litigantes Ltda. en Liquidación y Arturo Callejas Marín
Demandado	José Luis Viveros Abisambra
Radicado	05001 31 03 020 2021 00200 02
Procedencia	Juzgado Veinte Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 077
Decisión	Confirma
Tema	Preclusión de los términos judiciales. <i>“Los términos judiciales cumplen la trascendental función de determinar con precisión la época “para la realización de los actos procesales por las partes, por los terceros interesados, por los auxiliares de la justicia y, también, por los jueces” Así, en auto 46 del 23 de julio de 1986, señaló: Es un principio del derecho procesal que los términos judiciales constituyen una garantía recíproca para las partes en juicio (proceso), evitan asaltos sorpresivos, estimulan la rapidez en la tramitación de los procesos y guardan su equilibrio, por lo cual en la interpretación de los textos legales que los establecen y gobiernan debe procederse con criterio de estricto derecho y con rigurosa sujeción a sus reglas formales”.</i>

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto José Luis Viveros Abisambra frente al auto del 22 de junio del año en

curso, proferido por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad, en el proceso que en su contra promovieron Abogados Litigantes Ltda. en Liquidación y Arturo Callejas Marín, mediante el cual se dictó auto que presta mérito ejecutivo.

### **ANTECEDENTES**

**a)** Ante el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, se presentó demanda de rendición provocada de cuentas instaurada por la sociedad Abogados Litigantes Ltda. en Liquidación y Arturo Callejas Marín en contra de Luis Viveros Abisambra, la cual se admitió por auto del 7 de julio de 2021. (Archivo 2, 3 y 5)

**b)** Por auto del 27 de octubre siguiente, se tuvo al demandado notificado por conducta concluyente y negó la solicitud de nulidad formulada por él, pues la alegó por fuera del término de traslado de la demanda y, por ende, resultaba improcedente deducir a partir de dicho escrito una oposición oportuna a la demanda. (Archivo 13)

**c)** Inconforme con la decisión la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, alegando que había existido indebida notificación, ya que la parte actora no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 y a la sentencia C-420 de 2020. Por auto del 22 de enero de 2022, se despachó desfavorable la petición de nulidad, y concedió la alzada, decisión confirmada por el Tribunal en providencia del 14 de marzo del mismo año. (Archivos 18 y 20)

d) En providencia del 22 de junio último, el juzgado de conocimiento expresó:

“En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1º, y 2º del artículo 379 del C.G. del Proceso, y dado que no hubo oposición oportuna por parte del demandado frente a las pretensiones de la demanda, se accederá a las mismas y se ordenará al señor José Luis Viveros Abisambra, pagar en favor de la parte actora, las sumas de dinero adeudadas, que fueron estimadas en el escrito de demanda.

“No obstante, lo anterior, dado que existe incongruencia en la demanda respecto de los valores que se indican adeudados en el hecho octavo y en la pretensión segunda de la demanda, se ordenará el pago acorde a lo expuesto en la *causa petendi*, que corresponde al fundamento fáctico de las pretensiones.

“De igual forma, el pago se ordenará a favor de la sociedad Abogados Litigantes Ltda. -En liquidación-, ó en subsidio, a favor del socio Arturo Callejas Marín, toda vez que así se deduce el pedimento, acorde a los hechos de la demanda.

“Por ello dispuso:

**“Primero:** Declarar que el demandado, **José Luis Viveros Abisambra** está obligado a rendir cuentas a los demandantes, **Abogados Litigantes Ltda.”- En liquidación-** y **Arturo Callejas Marín**, de los dineros por él recibidos en calidad de mandatario de los actores, de parte de las entidades que figuran como accionadas en los siguientes procesos judiciales:

Nº	Radicado	Demandante	Demandado
196	050012331000-1997-00217-00	Castañó Ciro, Marta Lucía y Otros.	Municipio de Villavicencio, Meta.
208	050012331000-1998-00200-00	Álvarez Gómez, Liborio Antonio y Otros.	Hospital “San Rafael” de Angostura, Ant.
270	050012331000-2001-04026-00	Hurtado Ángel, Elizabeth María y Otros.	La Nación (Ejército Nacional) e Isagen, S. A.

**“Segundo:** En consecuencia, se ordena al demandado, José Luis Viveros Abisambra, que proceda con el pago de las siguientes sumas de dinero adeudadas, acorde a la estimación efectuada en la demanda:

**“a)** A favor de **“Abogados Litigantes Ltda.”- En liquidación-** **1.** La suma de \$67'055.871, con relación a los cobros realizados en el proceso judicial con radicado 050012331000-1997-00217-00. **2.** La suma de \$117.600.000, con relación a los cobros realizados en el proceso judicial con radicado 050012331000-1998-00200-00. **3.** La suma de \$82.500.400, con relación a los cobros realizados en el proceso judicial con radicado 050012331000-2001-04026-00.

“Además, por concepto de los intereses moratorios a la una y media veces el interés bancario corriente, conforme lo establece el artículo 884 del C. de Co., causados sobre los capitales anteriores, a partir del día siguiente a las fechas en que el demandado recibió cada pago, conforme lo expresado en la demanda.

**“b)** En subsidio de lo anterior, el demandado pagará a favor del socio **Arturo Callejas Marín:** **1.** La suma de \$20'116.671, con relación a los cobros realizados en el proceso judicial con radicado 050012331000-1997-00217-00. **2.** La suma de \$35.280.000, con relación a los cobros realizados en el proceso judicial con radicado 050012331000-1998-00200-00. **3.** La suma de \$24.750.120, con relación a los cobros realizados en el proceso judicial con radicado 050012331000-2001-04026-00.

“Además, por concepto de los intereses moratorios a la una y media veces el interés bancario corriente, conforme lo establece el artículo 884 del C. de Co., causados sobre los capitales anteriores, a partir del día siguiente a las fechas en que el demandado recibió cada pago, conforme lo expresado en la demanda.

**“Tercero:** Condenar en costas al demandado, en favor de la parte actora. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma de \$10.435.110,00”.(Archivo 27)

**e)** El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación con fundamento en los siguientes hechos que tituló así:

(i) Incongruencia entre los hechos y pretensiones; (ii) inadecuada conformación del Litis consorcio por activa; (iii) se desconoce la realidad de los procesos reclamados en rendición de cuentas en este proceso; (iv) inoponibilidad sobre la distribución de anticipos de utilidades en sociedades en liquidación y menos si no los ha autorizado la asamblea o junta de socios; (v) no es posible el cobro de intereses moratorios para obligaciones que no se han constituido en mora; (vi) liquidación de los procesos solicitados; por lo anterior solicita que se revoque el auto impugnado. (Archivo 28)

**f)** Dentro del término de traslado la parte demandante, dijo que la impugnación debió rechazarse de plano, por extemporánea, además que como el demandado no se opuso a rendir cuentas, ni propuso excepciones, procedía cumplir con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 372 del C. General del Proceso, de ahí que según lo ha dicho el profesor Hernán Fabio López Blanco, en su obra *“Código General del Proceso – Parte Especial, página 135”*, decisión que resulta inapelable.

En el extenso escrito presentado por el demandado pretende dar respuesta a la demanda, lo que obviamente es extemporáneo, ya el Tribunal Superior de Medellín había sentado su posición sobre el particular en el auto del 14 de abril de 2022; por tanto, resulta evidente la carencia de fundamento legal de tales recursos, por lo que solicita se de aplicación al artículo 81 del C. General del Proceso. (Archivos 29 y 30)

**g)** Por auto del 15 de julio del año en curso, repuso parcialmente el auto del 22 de junio último, repuso su decisión parcialmente en

tanto que negó las suplicas de la demanda formuladas por Arturo Callejas Marín, en calidad de socio de Abogados Litigantes Ltda. – en Liquidación.

Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide lo pertinente, previas las siguientes;

## **II. CONSIDERACIONES**

1. Una primera consideración ha de hacerse en torno a la procedencia de la impugnación vertical frente al auto que recurrido.

En efecto, el apoderado de la parte actora al descorrer el recurso de reposición indicó que el Dr. Hernán Fabio López Blanco señala que en el proceso de rendición provocada de cuentas cuando el demandado nada manifiesta en el término del traslado, esto es, no niega que esté obligado a rendir las cuentas, ni las objeta y no propone excepciones previas, se dictará auto de acuerdo con la estimación hecha en la demanda, el cual presta mérito ejecutivo, y *“es inapelable, cuestión lógica porque si nada manifestó el demandado y el auto se profiere sobre la base de la estimación objetada es de asumirse que la oportunidad para cuestionar el monto quedó precluida.”* Código General del Proceso, Parte especial, pág. 161, Dupre Editores Ltda., 2017).

No sobra recordar que el C. de Procedimiento Civil, con la reforma introducida por el decreto 2282 de 1989 había señalado de manera expresa que, en ese evento, el auto era inapelable (art. 418 regla 2ª), de tal manera que a pesar de ser de aquellas

providencias que terminaba el proceso, expresamente estaba prohibida la apelación.

La regla 2ª del artículo 379 del C. General del Proceso elimina de su redacción la imposibilidad de la impugnación vertical, pero como lo señala el mismo Dr. López Blanco, es los eventos allí plasmados *“el proceso termina de manera rápida sin necesidad de sentencia que le ponga fin al mismo, ya que en esta hipótesis dispone el numeral 2 del art. 379, “se prescindirá de la audiencia y se dictará auto de acuerdo con dicha estimación, el cual presta mérito ejecutivo”<sup>10</sup> (ib.), por lo que resurge la aplicación del numeral 7 del artículo 321, es apelable el auto proferido en primera instancia “que por cualquier causa le ponga fin al proceso”.*

2. Lo anterior no significa en modio alguno la prosperidad del recurso, es más, el asunto que ahora concita la atención de la Sala es manifestación clásica del principio de eventualidad o preclusión.

En efecto, indudable que en el término de traslado, en virtud del comportamiento procesal del accionado, la consecuencia no fue otra que no negar que estuviera obligado a rendir las cuentas, ni las objetó y ni propuso excepciones previas. Sin embargo, solicita que se revoque la providencia impugnada con argumento que debió proponer vía excepciones previas o de mérito, en oportunidad ya fenecida.

---

<sup>10</sup> Como en el CGP se consagra la regla que podemos enunciar como que *el juez de la condena es el mismo de la ejecución*, el proceso ejecutivo pertinente se deberá adelantar ante el mismo juez que profirió el auto”.

El artículo 117 del Código General del Proceso se establece que los términos y oportunidades señalados por este código son perentorios e improrrogables, esto es, son de orden público, por ende, de imperativo cumplimiento (art. 13 ib.).

De ahí entonces, que nada queda a discreción del juez ni de las partes, son como lo llama la doctrina, fatales, de tal suerte que no pueden ser ampliados ni de oficio, ni a petición de parte, a menos que se tratare de un término señalado por el juez, ante ausencia del término legal, situación prevista en el artículo 119 del mismo código.

Igualmente, no sobra señalar que la Corte ha precisado que principios fundamentales en el derecho procesal civil son los de la preclusión y los de la lealtad procesal en virtud de los cuales el Código establece las diversas etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos desde la demanda hasta la sentencia, así como las oportunidades en que, en cada una de ellas, han de llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, precluida la cual no pueden ya adelantarse válidamente. Dijo la Corte, que los términos judiciales cumplen la trascendental función de determinar con precisión la época *“para la realización de los actos procesales por las partes, por los terceros interesados, por los auxiliares de la justicia y, también, por los jueces”*. Así, en auto 46 del 23 de julio de 1986, señaló: *Es un principio del derecho procesal que los términos judiciales constituyen una garantía recíproca para las partes en juicio (proceso), evitan asaltos sorpresivos, estimulan la rapidez en la tramitación de los procesos y guardan su equilibrio, por lo cual en la interpretación de los textos legales que los establecen y gobiernan debe procederse*



*con criterio de estricto derecho y con rigurosa sujeción a sus reglas formales” (GJ Tomo LVIII, 593).*

3. Aplicadas las nociones anteriores al *sub lite*, como se anunció al comienzo de estas consideraciones, la parte demandada pretende que se omita el término de traslado de la demanda que ya le precluyó, para traer al escenario procesal aspectos que debieron ser alegados al momento de contestar la demanda y no lo hizo, lo que implicaría quebrantamiento de normas de derecho público y aplicación inmediata sin posibilidad de argüir condiciones jurídicas o fácticas particulares creadas para desconocerlas; y siendo así, la providencia impugnada será confirmada.

### **III. DECISION**

Por lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Décima Civil de Decisión, CONFIRMA** el auto apelado de fecha y naturaleza indicada en la parte motiva de esta providencia. Sin costas por no haberse causado.

### **NOTIFÍQUESE**

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

**Firmado Por:**  
**Juan Carlos Sosa Londono**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 001 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9b21be41deb5dde8eec2848e41924f3c27444c0057a79d58e1b23c0bfe31b7f0**

Documento generado en 27/10/2022 10:11:04 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**